


Contestación demanda Protección S.A 2023-103 Juan Carlos Buitrago Salazar

MPA Abogados Zona Centro <mpacorporativomanizales@gmail.com>

Vie 23/06/2023 8:02 AM

Para: Juzgado 02 Laboral Circuito - Quindio - Armenia <j02lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: MPA Abogados Zona Centro <mpacorporativomanizales@gmail.com>; jcbuitrago61@gmail.com
<jcbuitrago61@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (12 MB)

Contestación C- 22062023- Juan Carlos Buitrago Salazar-.pdf;

Armenia, 22 de junio de 2023

Señores

Juzgado 02° Laboral del Circuito de Armenia

E.S.D.

Referencia: **Remisión | Contestación de la demanda**

Demandante: **Juan Carlos Buitrago Salazar**

Demandado: **Protección S.A.**

Radicado: **2023-103**

María José Jaramillo Vinasco, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.053.872.458 de Manizales y tarjeta profesional N° 375.960 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder que me ha sido conferido, el cual expresamente acepto y anexo, actuando en el proceso ordinario laboral de la referencia en nombre y representación de la Administradora de Fondo de Pensiones **Protección S.A.**, respetuosamente me permito remitir vía correo electrónico **contestación de la demanda** instaurada por la señora **Constanza Milena Ramirez Agudelo** ante la secretaría del honorable despacho.

Gracias por su atención.

Atentamente,

María José Jaramillo Vinasco

Abogada Mpa

C.C 1.053.872.458

T.P. 375.960 del C.S de la J.

mpacorporativomanizales@gmail.com

301 4682898

Armenia, 22 junio de 2023.

Juez 02° Laboral Del Circuito de Armenia
E.S.D

Asunto: Contestación de la demanda
Referencia: Proceso ordinario laboral de primera instancia
Demandante: Juan Carlos Buitrago Salazar
Radicado: 2023-103

María José Jaramillo Vinasco, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.872.458 de Manizales, domiciliada y residente en la ciudad de Manizales, Caldas, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 375.960 del C.S. de la J., adscrita a la **sociedad Mauricio Pava Lugo S.A.S** actuando en calidad de apoderada judicial de la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A**, según poder otorgado por su representante legal judicial, la Doctora **Ana Beatriz Ochoa Mejía** a la sociedad **Mauricio Pava Lugo S.A.S**, el cual acompaño a este escrito. Me permito dar contestación a la demanda de la referencia en los siguientes términos:

1. Hechos

- 1.1. No le consta, a esta administradora se deberá de probar en el curso del proceso.
- 1.2. No le consta esta administradora los tiempos que supuestamente el demandante ha cotizado en otro régimen y ante una entidad diferente a mi representada, por lo cual, será el señor José quien deberá probarlo en el curso del proceso.
- 1.3. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones, las relaciones laborales que aduce el demandante, por tratarse de hechos ajenos a mi representada y por lo cual será la misma quien deberá probarlo en el curso del proceso.
- 1.4. Este hecho contiene varias afirmaciones que se responderán de manera individual:
 - No le consta, a esta administradora las relaciones laborales que aduce el demandante, por tratarse de hechos ajenos a mi representada y por lo cual será la misma quien deberá probarlo en el curso del proceso.
 - No es cierto, que en el caso de la demandante haya faltado asesoría clara y ajustada a derecho. Los asesores de la Administradora que represento son capacitados permanentemente y cuentan con el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para orientar a los posibles afiliados y en ese sentido, se asesoró en debida forma al actor respecto a todo el sistema general de pensiones colombiano, donde se le explicaron las

características del RAIS y del RPM, las diferencias entre ambos, la forma de adquirir una pensión en uno y otro, las consecuencias del traslado y todos los aspectos necesarios para que pudiera tener claridad respecto a su panorama pensional, esto con el fin de que pudiera tomar libremente la decisión de vincularse o no a este régimen voluntariamente, tal como sucedió en el caso que nos ocupa y en ese sentido, queda totalmente probado que la asesoría brindada a la demandante al momento de su vinculación fue suficiente, clara, coherente, y precisa.

1.5. En el presente hecho se incluyen diferentes afirmaciones que se contestarán de manera individual:

- No es cierto, mi representada en NINGÚN MOMENTO le manifestó a EL DEMANDANTE que el ISS se iba a acabar, ya que los asesores de esta administradora cuentan con toda la preparación y capacitación para orientar en forma debida a los posibles afiliados y no hace parte de sus argumentos para asesorar y vincular el decir que el ISS “se iba a acabar”, sin embargo, cabe anotar que la situación financiera y administrativa del Seguro Social, fue publicada en la página del periódico El Tiempo el día 28 de julio de 1998, en la cual titulaba temas de “El Seguro Social, en Quiebra”, por lo tanto, la situación crítica del Instituto de Seguros Sociales era de conocimiento público y divulgada en los medios de comunicación, y finalmente con llevó a su liquidación, por lo que esto era una idea generalizada de las personas que NO puede imputarse a los asesores de mi representada.
- No es cierto, La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A le proporcionó a la demandante toda la información respecto a las proyecciones y a las tablas de mortalidad, cabe aclarar que debido a las nuevas tablas de mortalidad que surgieron con la resolución 1555 de 2010 y a la resolución 3099 de 2015 cambió las fórmulas para el cálculo del saldo de una cuenta individual suficiente para cubrir vitaliciamente una pensión mínima de vejez, también influyeron para que las proyecciones pensionales de LA DEMANDANTE haya sufrido una variación respecto a las que se le pudieron haber realizado al momento de la afiliación (año 1994), y dichos cambios normativos **NO VICIAN EL CONSENTIMIENTO DE LA**
- No es cierto, se realizaron las respectivas proyecciones pensionales verbales en ambos regímenes, con el fin de determinar el panorama de las mesadas pensionales que se pueden recibir en uno u otro régimen, pero es pertinente aclarar que como su nombre lo dice eran **estimativos** del valor de las mesadas pensionales que se hacían con la información que contaba tanto la AFP como el demandante para el momento de la afiliación, por lo que no era posible para la fecha de la afiliación a Protección S.A, año 1994, con salario y beneficiarios de esa época y sin tener en cuenta los rendimientos que iba a generar la cuenta de ahorro individual, prever con exactitud el monto con el cual se podría pensionar el accionante y si sería mayor o menor en uno u otro régimen

o en uno u otro fondo. Lo anterior fue debida y claramente informado al demandante al momento de su vinculación a esta entidad, sin que en ningún momento existiera engaño por parte de mi representada, al contrario, la asesoría se realizó con total transparencia y veracidad.

- No es cierto, ya que se le informó a la demandante que una de las características del RAIS la cual se encuentra debidamente estipulada en la ley y que en ningún momento constituye un engaño, ni inducción a error por parte de mi representada es la pensión anticipada. Poniéndole de presente que esta, solo es posible SIEMPRE Y CUANDO se cuente con un capital en la cuenta de ahorro individual suficiente para financiar una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal vigente al 23 de diciembre de 1993, reajustado de acuerdo al IPC, tal como lo estipula el artículo 64 de la ley 100 de 1993. y 100 de 1993, pues en el RAIS el monto de la mesada se define según el CAPITAL ACUMULADO EN LA CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL independientemente de la edad o semanas de cotización, a diferencia del RPM donde la pensión se alcanza acreditando la edad establecida.
- No es cierto al demandante se le explicó que son regímenes diferentes y excluyentes entre sí y en ese sentido, no puede hablarse de ventajas o desventajas, ya que simplemente la favorabilidad de pertenecer a uno u otro va a depender de cada caso en particular y de las expectativas pensionales de cada afiliado. De conformidad con lo anterior, debe afirmarse que la asesoría suministrada a la actora fue totalmente OBJETIVA e INTEGRAL, donde se le pusieron de presente las características de ambos regímenes y las diferencias entre los mismos, por lo que correspondió al demandante realizar de acuerdo con toda la información recibida su propio juicio de conveniencia o favorabilidad que finalmente la llevó a elegir a esta Administradora en forma libre, voluntaria e informada, plasmando su firma en el formulario de afiliación en señal de conocimiento y aceptación.

1.6. No es cierto, que mi representada haya engañado y mucho menos constreñido a LA DEMANDANTE para afiliarse a esta entidad, pues los asesores de la Administradora que represento son capacitados permanentemente y cuentan con el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para orientar a los posibles afiliados y en ese sentido, se asesoró a LA DEMANDANTE respecto a todo el sistema general de pensiones colombiano, donde se le explicaron las características del RAIS y del RPM, las diferencias entre ambos, la forma de adquirir una pensión en uno y otro, las consecuencias del traslado y todos los aspectos necesarios para que la misma pudiera tener claridad respecto a su panorama pensional, esto con el fin de que la actora pudiera tomar libremente la decisión de vincularse o no a este régimen, pero no de manera impuesta, como maliciosamente lo pretende hacer ver LA

DEMANDANTE, sino voluntariamente, tal como sucedió en el caso que nos ocupa.

1.7. No es cierto, que en el caso de LA DEMANDANTE haya faltado asesoría clara y ajustada a derecho y que Protección haya ocultado información, pues como ya se ha manifestado a lo largo de esta contestación, los asesores de la Administradora que represento son capacitados permanentemente y cuentan con el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para orientar a los posibles afiliados y en ese sentido, el asesor de Protección S.A., asesoró en debida forma a la actora respecto a todo el sistema general de pensiones colombiano, donde se le explicaron las características del RAIS y del RPM, las diferencias entre ambos, la forma de adquirir una pensión en uno y otro, las consecuencias del traslado y todos los aspectos necesarios para que la misma pudiera tener claridad respecto a su panorama pensional, esto con el fin de que la actora pudiera tomar libremente la decisión de vincularse o no a este régimen, pero no de manera impuesta como lo pretende hacer ver LA DEMANDANTE, sino voluntariamente, tal como sucedió en el caso que nos ocupa y en ese sentido, queda totalmente probado que la asesoría brindada a LA DEMANDANTE al momento de su vinculación fue suficiente, clara, coherente, y precisa.

1.8. No es cierto, La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A a través de su representante o promotor al momento de la afiliación y traslado de la demandante no se limitó a llenar un formulario en blanco preestablecido por el mismo para la afiliación, tanto así que se le explicó a la demandante las implicaciones que tendría el cambio de régimen. Adicional solamente el asesor de Protección S.A es idóneo para asesorar respecto a este tema, porque cuenta con el conocimiento para realizarlo como se puede constatar en la política de asesoramiento a personas naturales.

1.9. No es cierto, debe indicarse además que PROTECCIÓN S.A siempre se ha caracterizado por contratar personal idóneo para cada uno de sus cargos, especialmente los ejecutivos del área comercial que son los que tienen contacto directo con sus afiliados y potenciales usuarios, los cuales son la razón de ser de esta entidad. Adicionalmente, además de exigir de los candidatos a dichas vacantes ciertos conocimientos previos en temas como atención al usuario, estrategias comerciales y de mercadeo, también se les brindan capacitaciones permanentes y educación continua sobre todos los aspectos del Régimen de Ahorro Individual y de esta Administradora como tal, para que puedan brindar una asesoría debidamente adecuada y responsable, y así suministrarle la mayor ilustración al posible afiliado y en ese sentido, el mismo pueda tomar la decisión que encuentre más adecuada a sus intereses, pero no mediante ningún tipo de constreñimiento como tendenciosamente lo pretende hacer ver LA DEMANDANTE sino de manera libre y voluntaria. Por lo cual, no es procedente indicar que se dio un documento en blanco sin una previa asesoría como lo establece la política de asesoramiento a personas naturales.

Respecto al hecho 10 y 11:

No es cierto, toda vez que en el mismo documento existe información personal del actor el

cual no era conocido por la asesora Isabel Cristina Buitrago. Adicionalmente, si así fuere, no existe en la demanda soporte de denuncia por falsedad en documento privado que indique la adulteración, suplantación de datos por parte de la Administradora de Fondo de Pensiones Protección S.A, como se puede detallar a continuación

1.10. .

1.11. .

VINCULACION INICIAL		<input type="checkbox"/>		AFP ANTERIOR		FSS	
TRASLADO AFP		<input type="checkbox"/>		ENTIDAD ADMINISTRADORA ANTERIOR		FSS	
TRASLADO DE REGIMEN		<input checked="" type="checkbox"/>					

INFORMACION DEL TRABAJADOR								
NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		T.I.	C.C.	C.E.	FECHA DE NACIMIENTO		NACIONALIDAD	SEXO
7536836			X		DIA	MES	AÑO	
					17	09	61	Colombiano
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES				
Buitrago		Salazar		Juan Carlos				
DIRECCION DE RESIDENCIA		CIUDAD O MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		TELEFONO		
calle 62 #7-33 apt.305		Bogota		C/marca		2498973		
DIRECCION DONDE LABORA		CIUDAD O MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		TELEFONO		
calle 6B #11-27		Bogota		C/marca		3124061		
ENVIO CORRESPONDENCIA:		RESIDENCIA		OFICINA		APARTADO AEREO		NUMERO
TIPO DE TRABAJADOR								
INDEPENDIENTE		<input type="checkbox"/>		HA COTIZADO MAS DE 150 SEMANAS EN I.S.S.		SI		CAJAS
DEPENDIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>		CUAL (ES)				

INFORMACION VINCULO LABORAL ACTUAL							
EMPLEADOR							
OCCUPACION O CARGO ACTUAL		SALARIO O INGRESO MENSUAL					
066		\$ 800.000 =					
SUPERVISOR DE AUDITORIA							
NUMERO DE IDENTIFICACION		NIT	C.C.	C.E.	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
860-403952-7		X			Audif Uconal		
DIRECCION CORRESPONDENCIA EMPLEADOR		CIUDAD O MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		TELEFONO	
calle 62 #11-27 apt. 305		Bogota		C/marca		2498973	

INFORMACION BENEFICIARIOS							
APELLIDOS Y NOMBRES		SEXO	NUMERO DE IDENTIFICACION	T.I.	FECHA NACIMIENTO	CODIGO PARENTESCO	CODIGOS PARENTESCO
María Fernanda Hernandez		X			24 05 61	01	
Carolina Buitrago H.		X			05 05 91	04	01 CONYUGE
Margarita S. de Buitrago		X			23 12 40	03	02 COMPANERO PERMANENTE
Heriberto Buitrago G.		X			10 09 29	03	03 PADRES
							04 HIJOS

1.12. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.13. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.14. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.15. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.16. No le consta a la Administradora de Fondo de Pensiones Protección el motivo por el cual el accionante decidió trasladarse entre Administradoras de Fondo de Pensiones en el Régimen de Ahorro individual.

1.17. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.18. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.19. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.20. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.21. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.22. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.23. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.24. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.25. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones el motivo de traslado del accionante, por lo cual, deberá de probarse en el curso del proceso.

1.26. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones, las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.27. No le consta a esta Administradora de Fondo de pensiones el motivo del accionante decidió afiliarse a Skandia.

1.28. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dada por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.29. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones el motivo para trasladarse entre Administradoras de Fondo de Pensiones del régimen privado.

1.30. No le consta a mi representada, las afiliaciones realizadas ante otras Administradoras de Fondo de Pensiones, lo que, si es cierto, es el reconocimiento de voluntad del accionante al permanecer por más de 20 años en el régimen privado y adicionalmente haber recibido más de 6 asesorías y afiliaciones en diferentes años de diferentes Administradoras del Fondo Privado, inclusive regresando a las mismas. Denotando un acto de relacionamiento que es evidente en el presente y no es posible pasar por alto dicha situación.

1.31. Este hecho contiene diferentes afirmaciones que se contestarán de manera individual:

- No es cierto, La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A, manifestó toda la información al demandante, indicando que tenía derecho a retractarse de la afiliación al fondo privado de pensiones según la ley 1161 de 1994, dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se haya manifestado por escrito la correspondiente vinculación. Así mismo el demandante contaba con la posibilidad según la ley 797 de 2003 de cambiar de régimen pensional cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a su pensión de vejez y no realizó ningún trámite para efectuarlo.
- No es cierto, que mi representada no le informara a LA DEMANDANTE sobre las consecuencias del traslado, las modalidades de pensión y un comparativo pensional entre ambos regímenes al momento de la afiliación; toda vez, que, a LA DEMANDANTE al momento de la afiliación se le suministro toda la información necesaria para que la misma pudiera tomar una decisión responsable, en donde se le plantearon todos los escenarios posibles y la misma tuviera la facultad de elegir. Se le indicaron las características de ambos regímenes y los requisitos para poder adquirir la pensión en uno y otro, teniendo en cuenta las leyes que regulaban los temas para la época. Adicionalmente, a LA DEMANDANTE se le respondieron todas las inquietudes que se le presentaron respecto al tema para que en ese sentido hubiera claridad sobre la decisión que se estaba tomando. De conformidad con lo anterior, es totalmente claro que la afiliación se realizó libre de engaño, sin presión alguna, **de manera libre, voluntaria y espontánea y sin configurar ningún tipo de vicio del consentimiento** tal y como se evidencia con la firma plasmada en el formulario de vinculación inicial.
- No es cierto al DEMANDANTE se le explicó que son regímenes diferentes y excluyentes entre sí y en ese sentido, no puede hablarse de ventajas o desventajas, ya que simplemente la favorabilidad de pertenecer a uno u otro va a depender de cada

caso en particular y de las expectativas pensionales de cada afiliado. De conformidad con lo anterior, debe afirmarse que la asesoría suministrada a la actora fue totalmente OBJETIVA e INTEGRAL, donde se le pusieron de presente las características de ambos regímenes y las diferencias entre los mismos, por lo que correspondió al señor Juan Carlos Buitrago Salazar, realizar de acuerdo con toda la información recibida su propio juicio de conveniencia o favorabilidad que finalmente la llevó a elegir a esta Administradora en forma libre, voluntaria e informada, plasmando su firma en el formulario de afiliación en señal de conocimiento y aceptación

1.32. No es cierto, Protección S.A a través de sus asesores brindó toda la información suficiente, establecida en el ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO para que la actora pudiera tomar una decisión libre y exenta de cualquier vicio de consentimiento como se constata con las pruebas adjuntas en la presente contestación.

La información entregada al demandante fue objetiva e integral, en especial se le informó sobre todas las características del Régimen de Ahorro Individual en comparación con el Régimen de Prima Media, señalándole las siguientes diferencias o aspectos comparativos o característicos entre uno y otro como se puede constatar en las pruebas adjuntas en esta contestación:

Fondo Común:

En el RAIS la pensión se deriva del capital acumulado en una CUENTA DE AHORRO individual a nombre de cada persona, en la cual se depositan sus aportes y se generan rendimientos financieros de acuerdo con el movimiento del mercado, por lo que el dinero allí ahorrado pertenece a cada afiliado y puede ser incluso heredado en caso de fallecimiento a falta de beneficiarios, lo que no ocurre en el RPM donde los aportes de cada afiliado son depositados en un Fondo Común que NO genera rendimientos financieros con el que se pagan las pensiones de todos los afiliados, razón por la que el dinero de sus aportes no es de su propiedad y no es heredable.

Capital Acumulado Vs. Requisitos de edad y semanas de cotización:

Otra de las principales características que se explicó al demandante fue la correspondiente a que en el RAIS se alcanza el derecho a pensionarse y se define en el monto de la mesada según el CAPITAL ACOMULADO EN LA CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL, independientemente de la edad o tiempos de cotización, a diferencia del RPM donde la pensión se alcanza acreditando la edad establecida por el legislador de 57 años mujeres y 62 hombres y un mínimo de 1300 semanas de cotización e igualmente el monto de la mesada está determinado por el número de semanas cotizadas.

Garantía de pensión mínima en RAIS:

También se informó al demandante sobre la garantía de Pensión Mínima en el RAIS la cual consiste en el derecho a obtener una pensión de vejez equivalente a 1 smlv garantía que NO EXISTE EN EL RPM donde inevitablemente se deben acumular mínimo 1300 semanas para acceder a la pensión de vejez.

Devolución de Saldos Vs. Indemnización Sustitutiva:

Finalmente, también se asesoró al demandante sobre este aspecto diferenciados entre ambos regímenes cuando no se alcanza el derecho a pensionarse, pues en el RAIS se puede optar por una devolución de saldos la cual equivale a capital acumulado en la cuenta de ahorro individual con sus rendimientos financieros a diferencia del RPM donde se obtiene una INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA que corresponde al valor de los aportes del afiliado con su correspondiente actualización monetaria (indexados).

Así las cosas, una vez asesorado en forma CLARA Y OBJETIVA sobre las características de ambos regímenes, le correspondió al demandante elaborar su propio juicio de conveniencia o favorabilidad según sus expectativas y situación personal, juicio que además solo corresponde hacer al afiliado con sus valoraciones internas y no a la AFP cuyo único deber legal es brindar asesoría completa, adecuada, suficiente y oportuna el cual fue cabalmente cumplido por mi representada.

1.33. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.34. No le consta a esta Administradora de Fondo de Pensiones las asesorías e información dadas por otras AFP diferentes a mi representada, por lo cual, deberá de demostrarse a lo largo del proceso.

1.35. No le consta, a esta Administradora toda vez que los aportes y demás emolumentos fueron trasladados a la AFP Porvenir S.A, tal como se demuestra en el documento denominado constancia o certificado de traslado de aportes adjunto a la presente contestación.

2. Las pretensiones

2.1. Me opongo a esta pretensión por las siguientes razones:

Protección cumplió con su deber de asesorar y acompañar al demandante y en ningún tiempo lo engañó, ni mucho menos lo obligó a afiliarse a esta entidad, pues realmente se le suministró una asesoría completa, veraz y profesional, basada en los lineamientos legales y dentro de las reglas de la sana competencia, en la cual, la demandante pudo obtener la suficiente información y conocimiento para tomar una decisión responsable y debidamente informada.

Al demandante al momento de la afiliación se le suministró toda la información necesaria para que pudiera tomar una decisión responsable, en donde se le plantearon todos los escenarios posibles y tuviera la facultad de elegir. Se le indicaron las características de ambos regímenes y los requisitos para poder adquirir la pensión en uno y otro, teniendo en cuenta las leyes que regulan los temas para la época.

Adicionalmente, al demandante se le respondieron todas las inquietudes que se presentaron

respecto al tema para que en ese sentido hubiera claridad sobre la decisión que se estaba tomando. De conformidad con lo anterior, es totalmente claro que la afiliación se realizó libre de engaño, sin presión alguna, de manera libre, voluntaria y espontánea y sin configurar ningún tipo de vicio del consentimiento tal y como se evidencia con la firma plasmada en el formulario de vinculación inicial.

Por lo anterior, no puede prosperar la pretensión de ineficacia del traslado como pretensión principal, pues el acto jurídico celebrado entre el demandante y mi representada cumplió con todos los requisitos de existencia y validez y por lo tanto produce todos los efectos jurídicos derivados de esta.

2.1.1. Pese a que no es una pretensión dirigida contra mi representada me opongo, a que se declare la ineficacia de traslado de régimen pensional y de afiliación del demandante, y que como consecuencia se proceda a trasladar todos los aportes existentes en la cuenta de ahorro individual a nombre del accionante, junto con sus rendimientos y bono pensional, al Régimen de Prima Media con Prestación definida, toda vez que la decisión de trasladarse de régimen se dio de forma libre y voluntaria.

No es procedente que se ordene la devolución de lo que Protección S.A descontó por cuotas de administración, dado que se trata de comisiones ya pagadas y causadas durante la administración de los dineros, descuentos realizados conforme a la ley y como contraprestación a una excelente gestión en la administración de los recursos. Sin embargo, se deja constancia que Protección S.A trasladó todos los aportes que el demandante realizó a esta administradora con los respectivos rendimientos a la AFP correspondiente, como se evidencia en las pruebas aportadas en la presente contestación.

2.2. Me opongo frente a la condena en costas procesales por no haber lugar a que se predique conducta alguna en contra de mi representada, por el contrario, se solicita se condene en costas al demandante por no tener ningún asidero en sus pretensiones.

2.3. Me opongo, frente a la condena extra o ultra petita, por NO haber lugar a que se predique conducta alguna en contra de mi representada, NI existir asidero fáctico o jurídico para emitir tales condenas.

3. Fundamentos de derecho y razones de defensa

3.1 Validez y eficacia del acto jurídico de afiliación a Protección:

Pretende el demandante hacer ver que el acto jurídico de afiliación a Protección S.A es ineficaz, pero una afirmación de este talante no puede estar más alejada de la realidad, tal como se pasará a explicar a continuación:

Sea lo primero en poner de presente que todas las actuaciones de mi representada están y siempre han estado precedidas por la buena fe, la legalidad, y los parámetros de la compañía para asesorar a personas naturales.

Todas las personas afiliadas a esta Administradora de Fondos de Pensiones lo han hecho de forma libre y voluntaria, tal como lo manda el artículo 13 de la ley 100 de 1993. Prueba de lo anterior, es el formulario de afiliación mediante el cual el demandante manifestó su voluntad de pertenecer al RAIS, suscribiendo el mismo e indicando que la afiliación se realizó completamente libre de vicios del consentimiento. Es importante mencionar que todos los formularios de afiliación de la entidad que represento cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 692 de 1994 artículo 11 y ss.

Protección S.A brindó una asesoría completa y comprensible al demandante al momento de realizar su afiliación, asesoría que se realizó conforme a la normatividad de la época y conforme a las exigencias existentes para ese momento. Mi representada se ha caracterizado siempre por capacitar a sus asesores de la mejor manera para que puedan brindar una asesoría cierta, suficiente y oportuna, pero sobre todo profesional como lo ha establecido la ley y la Superintendencia Financiera en repetidas ocasiones, respecto al Régimen de Ahorro Individual y sus efectos. Dentro de la información que se les ofrece a los afiliados, Protección S.A, les indican temas como: la posibilidad que tienen de optar por una pensión a una edad anticipada, siempre y cuando cuenten con capital suficiente que les permita financiar una pensión superior al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente al año de 1993 tal como establece el artículo 64 de la ley 100 de 1993; la figura de la garantía de Pensión Mínima de Vejez a la que tienen derecho en el evento de no cumplir con el capital requerido podría acceder a la pensión de vejez siempre y cuando cumpliera con los requisitos de edad y semanas exigidos en el artículo 65 de la ley 100 de 1993, igualmente, se les da a conocer la posibilidad de obtener unos excedentes de libre disponibilidad, el factor herencia del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual a falta de beneficiarios de ley, entre otras ventajas. De igual forma se entera sobre las implicaciones que trae su afiliación al RAIS y los aspectos diferenciadores respecto al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

No puede hablarse de que existe un error en el consentimiento del demandante, al momento de suscribir la afiliación a la Administradora de Fondos de Pensiones pues como ha quedado demostrado en el acápite de pruebas al demandante se le brindó la información necesaria, cierta, suficiente y oportuna.

Ahora bien, si lo que se pretende es que se establezca que el consentimiento estuvo viciado por un error de derecho, es importante recordar que de conformidad con el artículo 1509 del código civil, “ el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”, en ese sentido el desconocimiento que en su momento el actor tuvo de los aspectos legales del RAIS no vician el consentimiento; pues como se sabe “ el desconocimiento de la ley no sirve de excusa”, a pesar de leer expresamente las consecuencias que se encontraban en la vinculación.

Así las cosas, no puede hablarse de una nulidad en el acto jurídico de afiliación del demandante pues como quedó demostrado no existe error en el consentimiento y mucho menos fuerza o dolo pues se insiste que la decisión tomada se dio de manera libre y voluntaria y en ese sentido el acto jurídico objeto del presente proceso es absolutamente válido.

No puede tampoco existir la ineficacia del acto jurídico de afiliación, puesto que la entidad que representó jamás ha ejercido, ni ejerce la fuerza o presión sobre una persona para que se

afilia al fondo de pensiones y cesantías Protección S.A ya que como se indicó en las líneas anteriores, las actuaciones que adelanta dicha entidad siempre están sujetada a las buenas costumbres la moral y la buena fe. Por todo lo anterior mi representada nunca ha atentado contra el derecho del demandante de selección libre voluntaria y espontánea del organismo de seguridad social al que quiso pertenecer acorde a lo preceptuado por el artículo 271 de la ley 100 de 1993.

Así mismo se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral respecto a ciertos criterios que se deben tener en cuenta para que pueda predicarse la ineficacia del acto jurídico del traslado indicando que existirá ineficacia de la filiación cuando quiera que: La insuficiencia de la información genera lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado y impidiéndole su acceso al derecho.

De lo anterior, entonces se puede establecer que en el caso particular del demandante que no hubo insuficiencia en la información brindada al momento de la afiliación, pues como quedó expresado en la contestación a los hechos, al señor José se le explicó con claridad el funcionamiento del régimen y sus implicaciones al derecho pensional, adicionalmente el acervo probatorio que se aporta con esta contestación se pueden ver claramente las asesorías que dan cuenta de información clara, suficiente y oportuna, correspondiente a la realidad que se le brindó al afiliado. Quedando más que demostrado, que el acto de afiliación del demandante a la entidad que represento, es totalmente válido y eficaz y libre de cualquier vicio de consentimiento, tal como quedó anteriormente expuesto, y en ese sentido es propio decir que las pretensiones del demandante no deben prosperar.

3.2. Actos de relacionamiento:

El señor Juan Carlos durante el tiempo en el que ha estado cotizando al RAIS, es decir, desde el año 1994 momento en el cual decidió de forma libre, espontánea y voluntaria, trasladarse de régimen, ha realizado actos de relacionamiento convalidando así su decisión de permanecer al RAIS. Ello se evidencia con la actualización de datos y re-aseoría que recibió por parte de los asesores de Protección S.A el 27 de septiembre de 2013, momento en el que decidió aplazar la decisión de trasladarse de régimen y continuar afiliado a la AFP Protección S.A.

En sentencia CSJ SL 1061-2021, cuya magistrada ponente es Ana María Muñoz Segura, se analizan los comportamientos que convalidan y afirman la decisión de la persona de trasladarse del RPM al RAIS, y de permanecer en este; determina que los aportes al sistema son una manifestación de la voluntad de la persona cuando se presentan dudas respecto a su convencimiento y deseo de cambiar de régimen. Al igual, existen expresiones de la voluntad como la actualización de datos, solicitud de saldos, claves y demás información acerca de las cotizaciones realizadas, actos que demuestran y evidencian el compromiso serio de permanecer en el RAIS. Este análisis y fundamento jurisprudencial es apoyado y reiterado en CSJ SL413-2018. Es así como se concluye que, los traslados horizontales entre Administradoras de Fondos Privados de Pensiones constituyen indudablemente actos de relacionamiento que permiten presumir que la intención y deseo de la persona de estar afiliado y cotizando al RAIS, conociendo y asumiendo su conocimiento respecto a las características, implicaciones y riesgos que puede acarrear por estar vinculado a este régimen.

3.3. Falta de ejercicio de la facultad de regresar al RPM:

Es importante señalar que una vez efectuado el traslado de régimen por el demandante, ésta tuvo diferentes oportunidades en las que pudo regresar al régimen de prima media sin que hubiese hecho uso de la facultad con que contaba para hacerlo; en primer lugar, el decreto 1161 de 1994 consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, posibilidad que no usó el demandante, a pesar de estar descrito expresamente en el formulario de afiliación.

De igual forma, el demandante tampoco hizo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la ley 100 de 1993 modificado posteriormente por la ley 797 de 2003 literal e), la cual consiste en la posibilidad de trasladarse de régimen pensional cuando ha permanecido en el mismo durante 5 años siempre y cuando no le falten menos de 10 años para cumplir la edad mínima requerida para acceder a la pensión de vejez, oportunidad con que contó el demandante y sin embargo no hizo uso de ella.

Adicionalmente, el demandante tampoco optó por regresar al RPM en el periodo o año de gracia otorgado por el art.1 del Decreto 38010 de 2003, a pesar de que esta prerrogativa fue ampliamente publicitada por las Administradoras de fondos de pensiones a través de Asofondos mediante aviso en el diario El Tiempo el 14 de enero de 2004.

Por lo anterior, no es de recibo a la fecha, después de transcurridos más de 25 años, el demandante pretenda invalidar o decir que es ineficaz un acto jurídico plenamente realizado con todos sus efectos, con el argumento de no haber recibido información suficiente, pues como quedó demostrado tuvo conocimiento en varias oportunidades de la posibilidad de regresar al RPM y tampoco ejerció su derecho en el término oportuno.

3.4. Irretroactividad de las normas jurídicas:

Tratándose de la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo, es clara la regla general en la irretroactividad de la ley, esto es las normas jurídicas regulan situaciones posteriores a su promulgación por la situación consolidadas en el pasado serán regulados por la norma anterior.

Así las cosas, sólo hasta la promulgación de la ley 1328 de 2009 y el decreto 2555 de 2010 estableció expresamente que el deber de las Administradoras de Fondos de Pensiones de asesorar e informar a sus consumidores financieros sobre los efectos beneficios e inconvenientes de los regímenes pensionales y con posterioridad a dichas normas la ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015. Complementario a lo anterior, se ordena a las AFP poner a disposición de los usuarios herramientas financieras que permitan obtener mayor comprensión sobre el régimen pensional seleccionado y los efectos que acarrea su decisión de trasladarse o permanecer en uno u otro.

Adicionalmente sólo hasta la circular 016 de 2016 surgió la obligación para las administradoras de conservar soportes documentales que den cuenta de la doble asesoría recibida por los usuarios cuando desean afiliarse o trasladarse de un régimen pensional a

otro, por lo que hasta el año 2016 las asesorías que se venían realizando a los afiliados, en la mayoría de los casos eran verbales sin que por ello puede afirmarse que no fueran asesorías; completas, transparentes, veraces y oportunas. Tampoco podría exigirse a la AFP que fuera de otro modo, ya que ésta era una forma correcta de actuar y ajustada a la ley vigente al momento de traslado del demandante.

3.5. Oponible a terceros:

El acto jurídico que se suscribió entre Protección S.A y el señor José tiene la naturaleza de un verdadero contrato entre el demandante y Protección S.A, por virtud del cual se generaron derechos y obligaciones en cabeza tanto del Fondo como del afiliado. Dicha manifestación de voluntad estuvo libre de presión y engaños, ya que el actor tuvo la suficiente ilustración para que optara por el traslado de régimen y su afiliación a Protección S.A.

La variación del monto de la pensión NO constituye vicio del consentimiento ni causal de ineficacia, Como se esbozó en la contestación de los hechos, el demandante fue plenamente informada sobre la característica principal del RAIS la cual es la construcción de un ahorro en una cuenta individual donde se depositan todos los aportes pensionales a lo largo de la vida, generando rendimientos financieros de acuerdo al comportamiento del mercado; adicionalmente, se informó que el monto de la pensión es variable, pues depende de diversas circunstancias particulares de cada afiliado como lo son: edad, beneficiarios, expectativa de vida según tabla de mortalidad de rentistas, saldo de la cuenta de ahorro individual (capital, bono y rendimientos), factor actuarial (combinación expectativa de vida y factor financiero), aportes voluntarios y la regulación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para liquidar la mesada, por lo que no era posible para la fecha de la afiliación a Protección S.A en el año 1999, con salario y beneficiarios de esa época y sin tener en cuenta los rendimientos que iba a generar la cuenta de ahorro individual, prever con exactitud el monto con el cual se podría pensionar, sin embargo se brindaron estos parámetros legales generales de aquella época con el fin de NO dar lugar a creación de expectativas falsas o elevadas por parte de la afiliados ya que su mesada es el resultado de sus cotizaciones más sus ganancias financieras.

No obstante, se pone de presente que la asesoría brindada al demandante se realizó con base en la información que aportaba en ese momento la afiliada y las normas vigentes para la época, que para el caso particular era la Resolución 1875 de 1997 del Ministerio de hacienda y crédito Público, que consagraba unas reglas específicas para liquidar la pensión de vejez en el RAIS y que hoy fue derogada por la Resolución 3099 de 2015, que modificó sustancialmente estas reglas, haciendo que en la actualidad puedan variar las proyecciones pensionales que se hayan podido realizar con fundamento en la norma anterior. Dicha diferencia que pueda existir hoy en el monto de la pensión en el RAIS y en el RPM, se puede explicar por los factores antes señalados y no constituye una omisión de información por parte de mi representada, sino que, por el contrario, obedece a cambios normativos y al comportamiento de la cuenta de ahorro individual del actor, por lo que no puede pretender endilgarse a mi representada alguna responsabilidad atribuyéndole un mal actuar sólo porque ahora el demandante no se encuentra satisfecha con el posible monto de su mesada pensional cuando claramente la insatisfacción posterior no es un vicio del consentimiento, ni causal de ineficacia.

3.6. Obligaciones de los consumidores Financieros:

La ley 1328 de 2009, definió obligaciones para los consumidores financieros, las cuales se encuentran consagradas en el artículo 6, de la siguiente manera:

“Las siguientes constituyen buenas prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros:

- ✓ *Cerciorarse si la entidad con la cual desean contratar o utilizar los productos o servicios se encuentre autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.*
- ✓ *Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación; es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas.*
- ✓ *Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros.*
- ✓ *Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que se le suministren de dichos documentos.*
- ✓ *Informarse sobre los órganos y medios de que dispone la entidad para presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos.*
- ✓ *Obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio.*

Parágrafo 2. Los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que estas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran.”

De acuerdo con lo anterior, hay que tener en cuenta que los consumidores financieros tienen el deber de estudio sobre situaciones, contratos y productos que desean adquirir, puesto que son sus situaciones las que se verían afectadas por una acción u omisión dolosa o culposa de alguna entidad, por eso es necesaria la comprensión amplia y clara sobre los productos que contratan, pues de esta manera pueden tomar una decisión informada, adecuada, consciente y beneficiosa sobre situaciones concretas de su vida personal o de otra índole.

Es menester resaltar que el conocimiento sobre los productos que adquiere un consumidor financiero son una responsabilidad compartida entre las entidades financieras y sus consumidores, quedando a cargo de estos últimos un deber de consulta, verificación, investigación y revisión de los productos que está contratando, como lo es la vinculación as un fondo de pensión obligatoria.

3.7. El Desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento:

A lo largo de la demanda, el actor pretende responsabilizar a las AFP a las cuales se afilió por no haberle informado las condiciones a las que estaba sometida. Sin embargo, es un principio del derecho que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su aplicabilidad (ignorantia juris non excusat), a pesar de existir un hecho comprobado en el cual firmó el consentimiento.

No puede argüirse en este caso falta de información o desconocimiento del sistema pensional y las condiciones aplicables propias del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues además del demandante estar obligada al principio del derecho mencionado anteriormente, el actor ha estado afiliado en el RAIS por más 20 años, por lo cual conoce de manera sucinta las condiciones del régimen al cual ha estado afiliado, así como las características del mismo y los factores que determinan la liquidación de su mesada al momento de cumplir los requisitos para obtener el reconocimiento de su pensión de vejez.

3.8. Nadie puede alegar a su favor su propia culpa: principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans:

Este principio general del derecho emanado incluso de la Constitución Política (Art.95) cuando prohíbe a los ciudadanos abusar de sus propios derechos y cuyo significado en palabras de la propia Corte Constitucional es: “nadie puede presentarse a la justicia para pedir protección si ella tiene como fundamento la negligencia, mala fe o dolo que ha cometido.” tiene cabida en este caso particular pues del análisis de los hechos y los argumentos esbozados en la demanda se puede concluir que la pretensión del demandante es que se declare la ineficacia de un acto jurídico con el fin de obtener consecuencias económicas más favorables en el monto de su pensión de vejez.

Para lograr lo anterior, se vale la parte demandante de afirmaciones que no son ciertas e indeterminadas como lo son: el decir que mi representada omitió información, que brindó asesoría inadecuada e incluso que la hizo incurrir en error para lograr su afiliación al RAIS, las cuales han sido ampliamente desvirtuadas en esta contestación pues se están aportando pruebas irrefutables de la asesoría completa, oportuna, adecuada, veraz, honesta, comprensible.

Por lo anterior, debe aplicarse al caso particular este principio de derecho según el cual nadie puede aprovecharse de su propia incuria, culpa o dolo para obtener ventajas indebidas o incluso inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico, pues como ha quedado claro mi representada advirtió claramente cuál sería el resultado de su mesada en el RAIS respecto al RPM y fue ella quien decidió bajo su responsabilidad afiliarse y permanecer en el Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por Protección S.A.

3.9. Prescripción y Convalidación:

Si lo que pretende el demandante es que se declare la nulidad por vicio en el consentimiento, la misma se tendría que declarar a través de la nulidad relativa, la cual goza de 4 años para

iniciar la respectiva acción rescisoria, plazo que se encuentra superado en el presente caso.

El término de prescripción inicia desde el momento que se suscribe el acto o contrato, en este caso, la suscripción del formulario de afiliación fue en el año 1999 transcurridos los 4 años, el acto se convalida y la nulidad que adolecieron, desaparece. Ya no podrá ser alegada por acción o excepción. Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 1750 del Código Civil.

En sentencia de tutela contra autoridad judicial del 15 de abril de 2015, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se manifestó al respecto, aclarando cualquier duda que se pudiera presentar y avalando la posición de la Sala Laboral del Tribunal Superior del distrito judicial de Antioquia el cual se refirió a la prescripción en los siguientes términos:

“No podemos desconocer que el fundamento fáctico de la controversia que nos convoca es de tipo civil porque tienen relación directa con los elementos del consentimiento, pues se está invocando el error como causal de nulidad y entonces por ello consideramos que en aplicación del artículo-- 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es viable dar aplicación al artículo 1750 invocado por la parte apelante y contabilizar el término prescriptivo desde el 1o de septiembre de 1994, a la misma fecha, día y mes de 1998 para efectos de prescripción. Entonces, así las cosas encontramos que la acción rescisoria para perseguir la nulidad del acto jurídico de traslado en este caso se encuentra prescrita y como no cabe duda que ese término empezó a contabilizarse el 1o de septiembre de 1994, no tenemos noticia en el expediente de que haya sido objeto de interrupción o de suspensión, entonces debe prosperar como previa”

Es importante resaltar que en la sentencia citada la Corte indicó estar de acuerdo con la posición del tribunal respecto a la prescripción en estos eventos y decidió negar el amparo al accionante.

De conformidad con lo anterior, queda más que claro que la acción pretendida se encuentra prescrita, pues si adicionalmente se pensara en aplicar las normas sociales referentes a la prescripción, es decir, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, la acción prescribió pasados 3 años desde la suscripción de la afiliación, es decir, un término menor al establecido en el artículo 1750 del Código Civil.

4.Excepciones de mérito

4.1. Inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir:

Teniendo en cuenta que la afiliación al Régimen de Ahorro Individual del actor se realizó conforme a los lineamientos legales y que se reconoció el precedente jurisprudencial en esta línea, no existe obligación ni causa para pedir pues es un hecho superado la posibilidad de traslado del actor al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

4.2. Buena Fe:

Todas las actuaciones de Protección S.A. relacionadas con la asesoría y la afiliación del demandante estuvieron precedidas de buena fe, dado que Protección S.A. accedió lo pretendido por el actor.

4.3. Prescripción:

De conformidad con el artículo 488 del C. S. T, en armonía con el artículo 151 del C.P.L., se establece que el transcurso del tiempo, en tres (3) años, hace que opere el fenómeno jurídico de la prescripción sobre lo demandado, la que debe afectar todas y cada una de las reclamaciones formuladas.

Así mismo, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del acto jurídico por vicios del consentimiento, como se expresó anteriormente, también se encuentra prescrito el término para proponer la acción, toda vez que han transcurrido más de 4 años desde la suscripción del formulario, esto de conformidad con el art. 1750 del Código Civil.

Lo anterior, en el hipotético y remoto evento que resultare condenada mi representada respecto de las pretensiones consignadas en la demanda.

4.4. Innominada o Genérica:

Adicionalmente solicitó al despacho que, de llegar a encontrar probados los hechos, que constituyan una excepción diferente a las propuestas, esta sea declarada de oficio a favor de mi representada Protección S.A, tal y como lo dispone el artículo 282 del código general del proceso.

5. Medios de prueba

5.1. Documentales

- 5.1.1. Formato de vinculación a Protección S.A de 1994.
- 5.1.2. Constancia de traslado de aportes a Porvenir S.A.
- 5.1.3. Soporte estado actual del accionante al interior de la AFP Protección S.A.
- 5.1.4. SIAFP.
- 5.1.5. Política de asesoramiento a personas naturales.
- 5.1.6. Comunicado de prensa del año de gracia.
- 5.1.7. Concepto emitido por la Superintendencia Financiera No 2015123910-002 del 29 de diciembre de 2015.

5.2. Interrogatorio de parte

- 5.2.1. Que deberá absolver el demandante en la audiencia de trámite que su despacho señal con exhibición de documentos y reconocimiento de firma y contenido.

6. Anexos

- 6.1. Poder a mi conferido.
- 6.2. Los documentos en acápite de las pruebas.
- 6.3. Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia donde consta la existencia y representación de la sociedad demandada.

7. Notificaciones

Apoderada de la parte demandada: Manizales. Carrera 23 No. 62-39. Centro Empresarial Capitalia, oficina 903 B. Celular: 3014682898. Correo electrónico: mpacorporativomanizales@gmail.com

Del H. señor Juez,

Maria Jose J. V

MARIA JOSE JARAMILLO VINASCO

C.C. 1.053.863.376

T.P 375.960